



Resolución No. CSJBOR23-1560
Cartagena de Indias D.T. y C., 11 de diciembre de 2023

“Por medio de la cual se decide una solicitud de vigilancia judicial administrativa”

Vigilancia judicial administrativa No: 13001-11-01-002-2023-00949

Solicitante: Jorge Tadeo Lozano Guardo

Despacho: Juzgado 2° Promiscuo Municipal de Turbaco

Servidores judiciales: Lina Paola Ávila Tinoco y Leydi Johana Ibarra Ospino

Tipo de proceso: Verbal

Radicado: 138364408900220220023400

Magistrado ponente: Iván Eduardo Latorre Gamboa

Fecha de sesión: 06 de diciembre de 2023

I. ANTECEDENTES

1.1 Solicitud de vigilancia judicial administrativa

Por mensaje de datos recibido el 14 de noviembre de 2023, el abogado Jorge Tadeo Lozano Guardo, solicitó se ejerciera vigilancia judicial administrativa sobre el proceso identificado con el radicado No. 138364408900220220023400, que cursa en Juzgado 2° Promiscuo Municipal de Turbaco, debido a que, según indica, se encuentra pendiente de pronunciarse sobre la contestación de la demanda.

1.2 Trámite de la vigilancia judicial administrativa

Por considerar que la solicitud de vigilancia judicial cumplía con los requisitos consignados en el artículo 3° del Acuerdo No. PSAA11-8716 de 2011, mediante Auto CSJBOAVJ23-1182 del 27 de noviembre de 2023, comunicado el 28 del mismo mes y año, se dispuso requerir a las doctoras Lina Paola Ávila Tinoco y Leidy Johana Ibarra Ospino, jueza y secretaria, respectivamente, del Juzgado 2° Promiscuo Municipal de Turbaco, para que suministraran información detallada del proceso referenciado, porque al revisar el expediente en la plataforma de consulta TYBA de la Rama Judicial, se observó que no está disponible para su consulta.

1.3 Informe de verificación

Dentro de la oportunidad para ello, las doctoras Lina Paola Ávila Tinoco y Leidy Johana Ibarra Ospino, jueza y secretaria, respectivamente, rindieron informe bajo la gravedad de juramento (artículo 5° Acuerdo No. PSAA11-8716 de 2011); indicó la funcionaria judicial, que el 12 de septiembre de 2023 el proceso ingresó al despacho para resolver las solicitudes allegadas por las partes, que el 22 de noviembre del año en curso ingresó al despacho el proyecto del auto mediante el cual se resolvió la solicitud de reforma de la demanda y se declara la pérdida de competencia por la cuantía, providencia que fue proferida el mismo día.

Por su parte, la secretaria del despacho indicó que se posesionó en el cargo el 5 de junio de 2023, que al revisar el expediente encontró que el 12 de mayo de 2023 se recibió solicitud de dictar sentencia y el 23 del mismo mes fueron allegados los poderes conferidos por la parte demandada.

Que el 25 de mayo de recibió la contestación de la demanda, de la cual se corrió traslado a las partes el 29 de mayo siguiente. Que el 2 de junio de la presente anualidad la parte demandada solicitó control de legalidad y por memorial allegado el 5 de junio se recorrió el traslado de la contestación y se solicitó reforma de la demanda.

Que el 11 de septiembre de 2023 se ingresó el expediente al despacho, el 22 de noviembre se pasó el proyecto de la providencia y el mismo día fue aprobado y suscrito por la jueza, la que se publicó en estado del 24 siguiente.

Por lo anterior, solicitan que se archive el presente trámite administrativo, teniendo en cuenta que las peticiones han sido tramitadas.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es competente para conocer sobre la solicitud de vigilancia judicial administrativa promovida por el abogado Jorge Tadeo Lozano Guardo, dentro del proceso de la referencia, conforme a lo prevenido en el artículo 1° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, reglamentario del numeral 6° del artículo 101 de la Ley 270 de 1996, habida cuenta que la solicitud se dirige en contra de uno de los despachos judiciales de esta circunscripción territorial.

2.2. Alcances de la vigilancia judicial administrativa

El Acuerdo PSAA11-8716 de octubre 6 de 2011, adopta el reglamento respecto del mecanismo de la vigilancia judicial administrativa consagrada en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y establece en su artículo 1° que se concibe *“para que la justicia se administre oportuna y eficazmente”* y que *“es diferente de la acción disciplinaria a cargo de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias”*, lo que conduce a inferir que el estudio se ciñe a determinar: *i)* cuestiones de incumplimiento de términos actuales, porque las anomalías pasadas deben ser objeto de los procesos disciplinarios; *ii)* si un funcionario incurrió en acciones u omisiones contrarias a la oportuna y eficaz administración de justicia; y *iii)* si existe una actuación en forma negligente o si, por el contrario, su tardanza se encuentra inmersa dentro de alguna de las causales de justificación.

De otra parte, el artículo 14 del Acuerdo en comento prescribe: *“Independencia y autonomía judicial. En desarrollo de las actuaciones de vigilancia judicial administrativa, los Magistrados de la Sala Administrativa competente deberán respetar la autonomía e independencia de los funcionarios, de tal suerte que en ningún caso podrán sugerir el sentido en que deben proferir sus decisiones”*. Dicha norma se encuentra en consonancia con lo contemplado en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política y el artículo 5° de la Ley 270 de 1996, lo cual significa que la institución de la vigilancia judicial administrativa, como mecanismo administrativo que es, no está diseñado para controvertir decisiones judiciales, ni la forma como un funcionario interpreta una norma o valora las pruebas. Así mismo, es pertinente resaltar que este trámite no es otra instancia judicial y no puede emplearse para revivir términos.

En conclusión, esta atribución del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es de naturaleza eminentemente administrativa y separada de la función jurisdiccional disciplinaria contra jueces y abogados, que le corresponde a la Comisión Seccional de Calle de la Inquisición No. 3-53 Edificio Kalamary.
Teléfono: 6647313. www.ramajudicial.gov.co
Correo electrónico: consecbol@cendoj.ramajudicial.gov.co
Cartagena – Bolívar. Colombia

Disciplina Judicial.

2.3. Planteamiento del problema a resolver

Conforme a la solicitud de vigilancia judicial administrativa y lo informado por los servidores judiciales, corresponde a esta Corporación determinar si han existido actuaciones y omisiones en el decurso del proceso de la referencia, en específico sobre la mora judicial alegada, que sean contrarias a la oportuna y eficaz administración de justicia.

En caso de estimarse lo anterior, atendiendo a que el solicitante enuncia circunstancias de mora judicial, se determinará la procedencia de la imposición de correctivos administrativos o compulsas de copias a la jurisdicción disciplinaria contra los servidores judiciales involucrados.

2.4. El derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8º, prevé dentro de las garantías procesales, el derecho de toda persona *“a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable (...)”*.

Por su parte, la Constitución Política en sus artículos 29 y 229 consagran los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, respectivamente, lo cuales comprenden las prerrogativas que se enuncian a continuación: i) el derecho que tiene toda persona de poner en funcionamiento el aparato judicial, ii) el derecho a obtener una respuesta oportuna, y iii) el derecho a que no se incurran en omisiones o dilaciones injustificadas en las actuaciones judiciales.

La anterior consagración implica el deber de todas las autoridades públicas de observar de manera diligente los términos y adelantar de manera oportuna los trámites judiciales de que conoce, en tanto su inobservancia y la dilación injustificada *“(...) pueden conllevar la vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración en general, y a la administración de justicia en particular”*, amén de resultar lejana la efectividad de una justicia material en el caso concreto.

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional ha considerado también que *“el incumplimiento de los plazos judiciales tiene un carácter excepcional, pues la regla general, contenida en el artículo 228 superior, es la obligatoriedad de los términos procesales”*, en ese sentido, se admite en casos excepcionales que el incumplimiento de los términos procesales no le es directamente atribuible al funcionario judicial en tanto *“la mora, la congestión y el atraso judiciales son algunos de los fenómenos que afectan de manera estructural la administración de justicia en Colombia”*.

En ese orden, con relación a la mora judicial, mediante sentencia T-052 de 2018, la Corte Constitucional precisó:

“La mora judicial es un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos.

(...)

Dentro del deber de garantizar el goce efectivo del derecho, se encuentra incluida la solución célere de los asuntos adelantados ante funcionarios judiciales, por ello, esta Corte ha determinado la prohibición de dilaciones injustificadas en la administración de justicia (...).

Al respecto, en Sentencia T-230 de 2013, reiterada en la T-186 de 2017, entre otras, la Sala Tercera de Revisión expuso las circunstancias en las cuales se configura la mora judicial injustificada: “(i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial”.

(...)

En el mismo fallo, se enunciaron las circunstancias en las que se encuentra justificado el incumplimiento de los términos judiciales señalados por la jurisprudencia constitucional, resumidos de la siguiente manera: “(i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley”.

También respecto a este asunto, el Consejo de Estado ha expresado: “(...) no existe mora judicial por el solo transcurso del tiempo, sino que esta debe ser injustificada, debe estar probada la negligencia de la autoridad judicial demandada y que sea probable la existencia de un perjuicio irremediable. Si por el contrario, la actuación de los falladores de instancia es célere y diligente, pero por circunstancias imprevisibles no es posible dar cumplimiento a los términos judiciales, tampoco se configura la alegada mora judicial”.

Quiere decir lo anterior, que para determinar si se está o no frente a una dilación justificada es necesario realizar un análisis valorativo y la comprobación de las circunstancias en el caso concreto, “juicio ciertamente complejo en el que *“deben tomarse en consideración las circunstancias particulares del despacho que adelanta la actuación y del trámite mismo, entre las que se cuentan: i) el volumen de trabajo y el nivel de congestión de la dependencia, ii) el cumplimiento de las funciones propias de su cargo por parte del funcionario, iii) la complejidad del caso sometido a su conocimiento y iv) el cumplimiento de las partes de sus deberes en el impulso procesal”.*

Por tanto, la omisión o dilación en el cumplimiento de los términos procesales en cuanto su relevancia constitucional está ligada a la relación intrínseca entre la carga funcional y el cumplimiento de los deberes a su cargo.

En conclusión, puede afirmarse válidamente, que de conformidad con la jurisprudencia sentada por estas corporaciones, la mora judicial que configura vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, se caracteriza por (i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente, (ii) la falta de motivo razonable y prueba de que la demora es debida a circunstancias que no puede contrarrestar y directamente relacionada con el punto anterior, y, (iii) la omisión en el cumplimiento de sus funciones por parte del trabajador, debido a la negligencia y desidia respecto de sus obligaciones en el trámite de los procesos.

A su turno, cuando se presenta un incumplimiento de los términos procesales, la prosperidad de las causales eximentes de sanción administrativa corresponde examinarlas en cada caso concreto. El incumplimiento de los términos se entiende justificado *“(i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constatan problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución del caso en el plazo previsto en la ley”*.

Lo descrito en precedencia, fue tenido en cuenta en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, cuando en el artículo 7º dijo:

“(...) la respectiva Sala Administrativo del Consejo Seccional de la Judicatura, decidirá si ha habido un desempeño contrario a la administración oportuna y eficaz de la justicia en el preciso y específico proceso o actuación judicial de que se trate.

Para el efecto se tendrá en cuenta que el hecho no obedezca a situaciones originadas en deficiencias operativas del despacho judicial, no atribuibles al servidor judicial, así como los factores reales e inmediatos de congestión no producidos por la acción u omisión del funcionario o empleado requerido, todo lo cual lo exime de los correctivos y anotaciones respectivas”.

Implica lo anterior, que en el trámite de una vigilancia judicial administrativa cada caso concreto debe analizarse de manera particular y observarse las circunstancias propias del despacho vigilado así como la gestión del servidor judicial, entre esos aspectos, la carga efectiva, los ingresos efectivos y la productividad entre otros, que permitan concluir, en el evento de no acatarse el término perentorio e improrrogable, la existencia de razones no sólo que la expliquen sino que la justifiquen, pues no es admisible que frente a circunstancias objetivas de dificultad en la gestión judicial se exija el cumplimiento inexorable de los términos, pues si bien su incumplimiento es sancionable, tal hecho *“se exculpa cuando se presenta una causa extraña o cuando se desborda la capacidad física del funcionario con la cantidad de trabajo que le corresponde en ese determinado momento (...)”*.

2.5. Caso concreto

El abogado Jorge Tadeo Lozano Guardo, solicitó se ejerza vigilancia judicial administrativa sobre el proceso identificado con el radicado No. 138364408900220220023400, que cursa en Juzgado 2º Promiscuo Municipal de Turbaco, debido a que, según indica, se encuentra pendiente de pronunciarse sobre la contestación de la demanda.

Frente a las alegaciones del peticionario, la doctora Lina Paola Ávila Tinoco, jueza, afirma bajo la gravedad de juramento, que el proceso ingresó al despacho el 12 de septiembre de 2023 y que el 22 de noviembre siguiente se profirió el auto mediante el cual se declara la pérdida de competencia en razón a la cuantía y se ordena la remisión al Juzgado 1º Civil del Circuito de Turbaco.

Por su parte, la doctora Leydi Johana Ibarra Ospino, secretaria, afirma, bajo la gravedad de juramento, que se posesionó en el cargo el 5 de junio de 2023, que el proceso pasó Calle de la Inquisición No. 3-53 Edificio Kalamary.
Teléfono: 6647313. www.ramajudicial.gov.co
Correo electrónico: consecbol@cendoj.ramajudicial.gov.co
Cartagena – Bolívar. Colombia

al despacho el 12 de septiembre de la presente anualidad con las solicitudes recibidas hasta esa fecha, que el 22 de noviembre se puso en conocimiento de la jueza el proyecto de la providencia, la cual fue aprobada y proferida el mismo día, finalmente publicada en estado del 24 de noviembre de 2023.

Examinadas la solicitud de vigilancia judicial administrativa, los informes rendidos bajo la gravedad de juramento, los documentos aportados y el expediente digital, esta Seccional encuentra demostrado que en el trámite del proceso se surtieron las siguientes actuaciones:

No.	Actuación	Fecha
1	Solicitud de dictar sentencia	12/05/2023
2	Poderes aportados por la parte demandada	23/05/2023
3	Contestación de la demanda	25/05/2023
4	Fijación en lista / traslado	29/05/2023
5	Solicitud de control de legalidad allegada por la parte demandante	02/06/2023
6	Memorial mediante el cual se descorre el traslado de la contestación	05/06/2023
7	Solicitud de reforma de la demanda	05/06/2023
8	Memorial de impulso procesal	30/06/2023
9	Memorial de impulso procesal	27/07/2023
10	Ingreso al despacho del expediente de las solicitudes recibidas hasta la fecha	12/09/2023
11	Suspensión de términos judiciales decretada por el Consejo Superior de la Judicatura	14/09/2023
12	Reanudación de los términos judiciales	21/09/2023
13	Memorial de impulso procesal	14/11/2023
14	Ingreso al despacho del proyecto de la providencia	22/11/2023
15	Auto mediante el cual se declara la pérdida de competencia y ordena la remisión del proceso al Juzgado 1° Civil del Circuito de Turbaco	22/11/2023
16	Publicación en estado	24/11/2023
17	Comunicación del requerimiento de informe dentro del trámite de la vigilancia judicial administrativa	28/11/2023

Descendiendo al caso en concreto, se tiene que el objeto de la solicitud de vigilancia judicial administrativa se ciñe en la presunta mora en la que se encuentra incurso el Juzgado 2° Promiscuo Municipal de Turbaco en pronunciarse sobre la contestación de la demanda.

Observa esta Corporación que, según el informe rendido por las servidoras judiciales, el 22 de noviembre de 2023 se profirió el auto que resolvió declarar la pérdida de competencia del juzgado, esto, con anterioridad a la comunicación del requerimiento de informe efectuado por esta Seccional, lo que se dio el 28 de noviembre siguiente, por lo que no se advierte una situación de mora judicial actual.

En relación a la actuación de la doctora Lina Paola Ávila Tinoco, jueza, se tiene que entre la fecha que el expediente ingresó al despacho, el 12 de septiembre de 2023, y la providencia adiada el 22 de noviembre siguiente, transcurrieron 42 días hábiles, término que supera el establecido en el artículo 120 del Código General del Proceso.

“ARTÍCULO 120. TÉRMINOS PARA DICTAR LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES POR FUERA DE AUDIENCIA. En las actuaciones que se surtan por fuera de audiencia los jueces y los magistrados deberán dictar los autos en el término de diez (10) días y las sentencias en el de cuarenta (40), contados desde que el expediente pase al despacho para tal fin (...).”

Sin embargo, no puede perderse de vista lo afirmado por la funcionaria judicial con relación a la carga laboral del juzgado, por lo que se pasará a verificar la información registrada en la plataforma SIERJU respecto del periodo en el que se observa la tardanza.

PERÍODO	INVENTARIO INICIAL	INGRESOS	SALIDAS	EGRESOS	INVENTARIO FINAL
1° trimestre de 2023	697	235	56	138	738
2° trimestre de 2023	738	264	39	180	783
3° trimestre de 2023	783	303	38	212	836

Se tiene que la carga efectiva es igual a inventario inicial más ingresos menos salidas, por lo que en el caso del despacho se tiene para el período relacionado:

Carga efectiva a corte del 30 de septiembre del 2023 = $(697+802) - 133$

Carga efectiva a corte del 30 de septiembre del 2023 = 1366

Capacidad máxima de respuesta para Juzgado Promiscuo Municipal para el año 2023 = 466 (Acuerdo PCSJA23-12040 de 2023)

Con base en las estadísticas anteriormente relacionadas, se encuentra que, en el tiempo analizado, la funcionaria judicial laboró con una carga efectiva equivalente al 293% respecto de la capacidad máxima de respuesta establecida para el año 2023, de lo que se colige la situación de congestión del despacho en cuanto a sus cargas laborales.

Igualmente, se procedió a consultar la producción del despacho reportada para el 3° trimestre de 2023, de la cual se obtuvo el siguiente resultado:

TRIMESTRE	AUTOS INTERLOCUTORIOS	SENTENCIAS	PROMEDIO DE PROVIDENCIAS DICTADAS POR DÍA
3° - 2023	180	112+	4,8

Según el criterio esbozado por Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la mora sancionable en los funcionarios judiciales será aquella en la que quede demostrado que ha sido la negligencia la que ha reinado y no el trabajo, que, a pesar de arduo, no dé el fruto esperado por las partes interesadas en el proceso. Así lo dispuso esa colegiatura en sentencia dentro del proceso N° 110010102000200202357:

“(…) lo anterior conforme a la pacífica jurisprudencia de esta Sala que ha considerado que una de las formas en que se exteriorizan o materializan los

Calle de la Inquisición No. 3-53 Edificio Kalamary.

Teléfono: 6647313. www.ramajudicial.gov.co

Correo electrónico: consecbol@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cartagena – Bolívar. Colombia

esfuerzos de los funcionarios por evacuar su trabajo dice relación con la concreta producción laboral que registra estadísticamente. Para probar tal hecho, esta colegiatura ha convenido entonces en determinar como mínimo uno (1) el número diario de providencias de fondo (sentencias y autos interlocutorios) para mediante un proceso de confrontación con el tiempo hábil específicamente laborado establecer si en cada caso concreto es viable predicar esmero y dedicación en la ejecución de sus tareas propias de su función, y así considerar la excesiva carga de trabajo como la causa irresistible de la mora (...). (Subrayado fuera del texto original)

Se tiene entonces, de la aplicación de la fórmula propuesta por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para el primer trimestre de 2023, que la funcionaria judicial presentó una producción superior a la mínima determinada, tal y como se desprende del cuadro señalado en líneas precedentes, cifras que, como producción laboral del despacho supera la establecida por esa sala, y se tendrá como referencia para inferir la producción del despacho correspondiente al segundo y tercer trimestre de la presente anualidad. Por lo que bajo ese supuesto, no habrá lugar a aplicar los correctivos determinados en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011 respecto de la doctora Lina Paola Ávila Tinoco, Jueza 2° Promiscuo Municipal de Turbaco.

Respecto de la secretaría de esa agencia judicial, se tiene que, entre la presentación de la solicitud de dictar sentencia el 12 de mayo de 2023, la solicitud de reforma de la demanda el 5 de junio, el vencimiento del traslado de la contestación el 15 de junio siguiente, y el ingreso al despacho del expediente el 12 de septiembre de la presente anualidad, transcurrieron 81, 66 y 59 días hábiles, respectivamente, términos que superan el establecido en el artículo 109 del Código General del Proceso.

“ARTÍCULO 109. PRESENTACIÓN Y TRÁMITE DE MEMORIALES E INCORPORACIÓN DE ESCRITOS Y COMUNICACIONES. El secretario hará constar la fecha y hora de presentación de los memoriales y comunicaciones que reciba y los agregará al expediente respectivo; los ingresará inmediatamente al despacho solo cuando el juez deba pronunciarse sobre ellos fuera de audiencia. Sin embargo, cuando se trate del ejercicio de un recurso o de una facultad que tenga señalado un término común, el secretario deberá esperar a que este transcurra en relación con todas las partes (...)”.

Lo anterior, en consonancia a lo consagrado en el artículo 153 de la Ley 270 de 1996 *ibidem*.

“ARTÍCULO 153. DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

(...)

2. Desempeñar con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad las funciones de su cargo. (...)

5. Realizar personalmente las tareas que les sean confiadas y responder del uso de la autoridad que les haya sido otorgada o de la ejecución de las órdenes que puede impartir, sin que en ningún caso quede exento de la responsabilidad que le incumbe por la que corresponda a sus subordinados. (...)

20. Evitar la lentitud procesal, sancionando las maniobras dilatorias, así como todos aquellos actos contrarios a los deberes de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe (...)”.

Debe tenerse en cuenta lo advertido por la doctora Leidy Johana Ibarra Ospino, secretaria del Juzgado 2° Promiscuo Municipal de Turbaco, respecto de su posesión en el cargo el 5 de junio de 2023, por lo que, revisado el expediente digital y los estados publicados en el microsítio del despacho, se observa que durante el periodo en que ocurrió la tardanza, se encontraba como secretaria de la agencia judicial la doctora Lina Sofía Martínez Salcedo. Así las cosas, se observa que desde la presentación de la solicitud de dictar sentencia el 12 de mayo de 2023, hasta el 2 junio siguiente, fecha hasta la cual fungió en el cargo la servidora judicial, transcurrieron 13 días hábiles sin que realizara el ingreso al despacho de la solicitud.

De igual manera, al revisar las actuaciones del proceso, se tiene que los demás memoriales y solicitudes presentadas por las partes, fueron recibidas con posterioridad a la posesión de la doctora Leidy Johana Ibarra e, inclusive, el mismo día, de manera que la servidora judicial conocía los trámites y, pese a ello, incumplió con el término previsto en el artículo 109 del Código General del Proceso para realizar el ingreso al despacho, sin indicar en el informe de verificación allegado con ocasión al presente trámite administrativo, las circunstancias que permitieran justificar dicha tardanza.

Así las cosas, se observa, entonces, la tardanza por parte de las doctoras Lina Sofía Martínez Salcedo y Leidy Johana Ibarra Ospino, en su calidad de secretarías del Juzgado 2° Promiscuo Municipal de Turbaco, sin que se hayan encontrado circunstancias que justifiquen el ingreso tardío de los memoriales al despacho, por lo que al estarse ante conductas presuntamente disciplinables, habrá de ordenarse la compulsión de copias de la presente actuación con destino a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, para que investigue las conductas desplegadas por las servidoras judiciales, conforme al ámbito de su competencia.

De igual manera, al no encontrarse una situación de mora judicial que requiera ser subsanada, y al estar justificada la tardanza por parte del despacho, será del caso archivar el presente trámite administrativo respecto de la doctora Lina Paola Ávila Tinoco, Jueza 2° Promiscuo Municipal de Turbaco. No sin antes exhortar a la funcionaria judicial, para que adopte medidas encaminadas a disminuir los tiempos de respuesta por parte de la secretaría de esa agencia judicial, en específico, que los ingresos al despacho se realicen dentro del término previsto en el artículo 109 del Código General del Proceso.

De conformidad con lo expuesto, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar,

III. RESUELVE

PRIMERO: Archivar la vigilancia judicial administrativa promovida por el abogado Jorge Tadeo Lozano Guardo, dentro del proceso identificado con el radicado No. 138364408900220220023400, que cursa en el Juzgado 2° Promiscuo Municipal de Turbaco, por las razones anotadas.

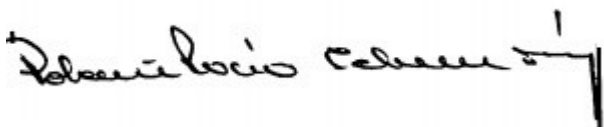
SEGUNDO: Compulsar copias de la presente actuación con destino a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, para que, en atención a lo consignado, investigue las conductas desplegadas por las doctoras Lina Sofía Martínez Salcedo y Leidy Johana Ibarra Ospino, en su calidad de secretarías del Juzgado 2° Promiscuo Municipal de Turbaco, en el trámite del proceso de marras, conforme al ámbito de su competencia.

TERCERO: Exhortar a la doctora Lina Paola Ávila Tinoco, Jueza 2° Promiscuo Municipal de Turbaco, para que adopte medidas encaminadas a disminuir los tiempos de respuesta por parte de la secretaría de esa agencia judicial, en específico, que los ingresos al despacho se realicen dentro del término previsto en el artículo 109 del Código General del Proceso.

CUARTO: Comunicar la presente decisión al solicitante, así como a las doctoras Lina Paola Ávila Tinoco y Leidy Johana Ibarra Ospino, jueza y secretaria, respectivamente, del Juzgado 2° Promiscuo Municipal de Turbaco.

QUINTO: Contra esta decisión solo procede recurso de reposición, que deberá ser interpuesto dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación o comunicación, ante esta misma corporación, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, art. 74 y siguientes.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



PATRICIA ROCÍO CEBALLOS RODRÍGUEZ
Presidenta

MP. IELG/MFLH